

ACOGIMIENTO. PLAZO PARA EJERCER LA OPOSICION AL DESAMPARO DEL MENOR. Acción de oposición. La acción de oposición debe ejercitarse en el plazo de caducidad de dos meses desde que se dictó la resolución de que se trate, y los legitimados para ello, siempre que tengan interés legítimo y directo en tal resolución. Transcurrido este plazo perentorio de dos meses la declaración de desamparo deviene firme Y EL Plazo de reintegración de modo que la reintegración del menor a su familia biológica exigirá el ejercicio de la acción de recuperación dentro de los dos años siguientes a la notificación de la declaración de desamparo. En este caso tanto el juzgado como la audiencia indicaron que había pasado mas de 2 meses y desestimaron la pretensión del pade. Sentencia Audiencia provincial de Valladolid de 26 abril 2021. Número Sentencia: 186/2021 Ponente: **José Ramón Alonso-Mañero Pardal. Origen instancia 3**

historia

- 11.4.2019 resolucion gerencia de servicios sociales
- 18.7.2019 plazo de oposición de hernan el padre(3 meses mas tarde)
- 21.4.2020 sentencia juzgado primera instancia 3

Plazo. Acción de oposición.la acción de oposición debe ejercitarse en el plazo de caducidad de dos meses desde que se dictó la resolución de que se trate, y los legitimados para ello, siempre que tengan interés legítimo y directo en tal resolución, serán además de los progenitores, tutores, acogedores, guardadores, el Ministerio Fiscal y aquellas personas que expresamente la ley les reconozca tal legitimación. Transcurrido este plazo perentorio de dos meses la declaración de desamparo deviene firme

Plazo de reintegración de modo que la reintegración del menor a su familia biológica exigirá el ejercicio de la acción de recuperación dentro de los dos años siguientes a la notificación de la declaración de desamparo i

Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y de la Adolescencia, en el que se establece que "para acordar el retorno del menor a su familia de origen será imprescindible

- que se haya comprobado una evolución positiva de las misma, objetivamente suficiente para restablecer la convivencia familiar,
- que se hayan mantenido los vínculos, que concurra el propósito de desempeñar las responsabilidades parentales adecuadamente
- y que se constate que el retorno con ella no supone riesgos relevantes a través del correspondiente informe técnico".

abecera: Situacion de desamparo. Proteccion de los menores. Patria potestad Interpone recuso de apelación contra la sentencia que ha sido dictada en el procedimiento de juicio verbal que se ha seguido con el número 663/2019 ante el juzgado de primera instancia número tres de valladolid sobre oposicion a resolucion administrativa de la gerencia territorial de servicios sociales de la junta de castilla y leon de fecha 11/04/2019 que

declara a la menor loreto en **situación legal de desamparo**, interesando un pronunciamiento de la sala que revoque la resolución dictada en la instancia y que en su lugar acuerde la reinserción de la menor en la familia formada por el aquí apelante y, dejando sin efecto la tutela del ente público y reintegrando la **patria potestad de la menor** a su padre con los efectos legales inherentes a dicha declaración. PROCESAL: Plazo de caducidad. Legitimación del ministerio fiscal

Jurisdicción: Civil

Ponente: José Ramón Alonso-Mañero Pardal Ir a

Origen: Audiencia Provincial de Valladolid

Fecha: 26/04/2021

Tipo resolución: Sentencia **Sección:** Primera

Número Sentencia: 186/2021 **Número Recurso:** 516/2020

Numroj: SAP VA 720/2021

Ecli: ES:APVA:2021:720

Abogados: Roberto Alvarez Ir a

Audiencia Provincial de Valladolid, de 26/04/2021 RES:186/2021 REC:516/2020

ENCABEZAMIENTO:

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

VALLADOLID

SENTENCIA: 00186/2021

Modelo: N10250

C.ANGUSTIAS 21

Teléfono: 983.413486 Fax: 983413482/983458513

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MGG

N.I.G. 47186 42 1 2019 0010723

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000516 /2020

Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: OMM OPOSICION MEDIDAS EN PROTECCION MENORES 0000663 /2019

Recurrente: Hernan

Procurador: ISABEL HERRERA SANCHEZ

Abogado: ROBERTO ÁLVAREZ Y VELASCO

Recurrido: MINISTERIO FISCAL, GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIO SOCIALES

Procurador: ,

Abogado: , LETRADO DE LA COMUNIDAD

S E N T E N C I A

Ilmo. Sr. Presidente: D. FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. JOSÉ RAMÓN ALONSO-MAÑERO PARDAL

Dª EMMA GALCERAN SOLSONA

En VALLADOLID, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS por esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, en grado de apelación, los autos

de OPOSICION MEDIDAS EN PROTECCION MENORES núm. 663/2019 del Juzgado de Primera Instancia núm.

3 de Valladolid, seguido entre partes, de una como DEMANDANTE-APELANTE D. Hernan , representado por la Procuradora D^a ISABEL HERRERA SANCHEZ y defendido por el letrado D. ROBERTO ÁLVAREZ Y VELASCO, y

de otra como DEMANDADA-APELADA GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIO SOCIALES, representada por el LETRADO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal.

[Ir arriba](#)

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 21.9.20, se dictó sentencia cuyo fallo dice así: "Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por DON Hernan frente a la **resolución de 11 de abril de 2019** de LA GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (sobre la declaración de desamparo del menor Loreto y la asunción de su tutela por la Gerencia de Servicios Sociales), debo declarar y declaro la procedencia y legalidad de la citada resolución. No se hace expresa imposición de costas atendiendo a la especial naturaleza del procedimiento."

TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la representación de D. Hernan se interpuso recurso de apelación dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria y por el Ministerio Fiscal se presentaron escritos de oposición al recurso. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 22 de abril de los corrientes, en que ha tenido lugar lo acordado.

Vistos, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Alonso-Mañero Pardal.

[Ir arriba](#)

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- D. Hernan interpone recuso de apelación contra la sentencia que ha sido dictada en el procedimiento de Juicio Verbal que se ha seguido con el número 663/2019 ante el Juzgado de Primera Instancia número Tres de Valladolid sobre Oposición a Resolución administrativa de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León de fecha 11 de abril de 2019 que declara a la menor Loreto en **situación legal de desamparo**, interesando un pronunciamiento de la Sala que revoque la resolución dictada en la instancia y que en su lugar acuerde la reinserción de la menor en la familia formada por el aquí apelante y D^a Paula , dejando sin efecto la tutela del Ente Público y reintegrando la **patria potestad de la menor** a su padre (D. Hernan) con los efectos legales inherentes a dicha declaración.

Considera el apelante en su recurso que así procede dado que las circunstancias concurrentes al **momento de la declaración de desamparo** y asunción de la tutela administrativa de Loreto han cambiado favorablemente.

La resolución recurrida desestima la demanda de oposición del sr. Hernan a la **declaración de desamparo** efectuada tras considerar, previo examen y valoración de la prueba practicada, que la decisión fue adoptada conforme a derecho al existir en aquél momento una situación de riesgo para la menor, tal y como dispone el **artículo 172 del Código Civil**, manteniéndose además en el momento actual la misma situación e idénticos factores de riesgo para la menor tutelada dado que el apelante no es consciente de las necesidades reales de Loreto y carece de habilidades suficientes para ocuparse de ella.

El Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la representación y defensa que ostenta de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y el Ministerio Fiscal, se oponen al recurso de apelación interpuesto e interesan la confirmación de la resolución recurrida por estimarla plenamente ajustada a derecho, no concurriendo los presupuestos que posibilitarían el éxito de la impugnación formulada por el sr. Hernan.

SEGUNDO-. En nuestra normativa legal reguladora de esta cuestión el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil establecen dos acciones distintas y dos procedimientos diferentes para sustanciarlas que no deben confundirse, pues el plazo de ejercicio de cada una de ellas es distinto.

En el **artículo 172.2 del Código Civil** se prevé la acción de revocación de la declaración administrativa de desamparo, cuyo plazo de ejercicio (plazo de caducidad) es de dos años desde la fecha de dicha declaración y para cuyo ejercicio solo están legitimados los padres y el tutor que tengan suspendida su patria potestad o la tutela, respectivamente, por efecto inherente a la **declaración de desamparo**, al objeto de solicitar de la Entidad Pública que cese la suspensión y quede revocada la **declaración de la situación de desamparo** del menor si, por cambio de las circunstancias que la motivaron, entienden que se encuentran en condiciones de **asumir nuevamente la patria potestad** o la tutela.

Sin embargo, y pese a los genéricos términos en que se articula el recurso de apelación, resulta que no es ese el procedimiento de esta litis. El procedimiento judicial que nos ocupa, y basta para ello el escrito inicial de oposición a la resolución administrativa que inicia el mismo, es el previsto en el **artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil**, esto es, el de **oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores**, entre ellas y como más importante la declaración administrativa de desamparo. En este caso, la **acción de oposición debe ejercitarse en el plazo de caducidad de dos meses** desde que se dictó la resolución de que se trate, y los legitimados para ello, siempre que tengan interés legítimo y directo en tal resolución, serán además de los progenitores, tutores, acogedores, guardadores, el Ministerio Fiscal y aquellas personas que expresamente la ley les reconozca tal legitimación.

Transcurrido este plazo perentorio de dos meses la declaración de desamparo deviene firme e inatacable, constituyendo una opción legislativa que unánimemente se considera adoptada en beneficio de la estabilidad del menor que, sometido en su infancia a una situación de desamparo, debe seguir después un proceso de rehabilitación emocional y de inserción en una nueva familia, que ha de estar presidido por criterios de estabilidad, continuidad y evitación de incidencias que hagan rebrotar los traumas pasados, **de modo que la reintegración del menor a su familia biológica exigirá el ejercicio de la acción de recuperación dentro de los dos años siguientes a la notificación de la declaración**

de desamparo invocando que, por cambio de las circunstancias que la motivaron, los progenitores se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad, siendo entonces cuando entra en juego lo establecido en el artículo 19 bis 3 de la Ley 26/2015 de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y de la Adolescencia, en el que se establece que "para acordar el retorno del menor a su familia de origen **será imprescindible que se haya comprobado una evolución positiva de las** misma, objetivamente suficiente para restablecer la convivencia familiar, **que se hayan mantenido los vínculos**, que concurra el propósito de desempeñar las responsabilidades parentales adecuadamente y **que se constate que el retorno con ella no supone** riesgos relevantes a través del correspondiente informe técnico".

En **el caso concreto que nos ocupa**, y en cuanto a la acción propiamente ejercitada en esta litis por el apelante de oposición a la declaración de desamparo, ex **artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil**, se ha de tener en cuenta que una vez fue iniciado el procedimiento de desamparo es en fecha 11 de abril de 2019 cuando se dicta resolución por la que se declara el desamparo de la menor Loreto ,

oponiéndose a la misma el sr. Hernan con fecha 18 de julio de 2019, **es decir más de tres meses después** del dictado de aquélla, dando lugar a los autos de referencia en que nos encontramos, **por lo que en el momento de formularse la oposición habría efectivamente transcurrido el plazo de caducidad de dos meses** para el ejercicio de la acción de oposición a la resolución administrativa de desamparo recaída en materia de protección de menores, perdiendo en consecuencia el accionante esa legitimación directa para instar la revocación de la situación de desamparo. **En consecuencia, sin otras consideraciones la acción ejercitada debería haberse estimado caducada de oficio por la Juzgadora " a quo "**.

No obstante ello, y para dar respuesta a los motivos de impugnación planteados por el apelante, hemos convenir en primer lugar, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de julio de 2009, en que la resolución de situaciones de conflicto entre, **ppor una parte, el derecho** al ejercicio de las relaciones paterno- filiales con respecto de los hijos menores de edad, y, por otra parte, la llamada de oficio a la tutela pública de sus intereses frente a situaciones de carencia, riesgo o desprotección inherentes a la declaración de desamparo (**artículo 172 del Código Civil**), habrán de resolverse mediante la ponderación de las circunstancias que concurran en cada caso, pero primando siempre, en caso de duda, o aún de mero riesgo, la protección del interés del menor. **En segundo lugar**, que no basta con la mera manifestación, o aún la demostración de aptitudes, habilidades o capacitaciones por parte del progenitor oponente para el ejercicio de los deberes inherentes a la patria potestad, si éstas no se acreditan por medios probatorios suficientes, más allá de la mera manifestación de parte; las cuales, además, habrán de ser adecuadas a las circunstancias del menor. **Y, en tercer lugar**, que, precisamente porque lo deseable es la reinstauración en lo posible de las relaciones paterno- filiales, su posposición, por inadecuada o inconveniente, con mantenimiento de la situación de desamparo, no impide que, conforme al artículo 172.2 ya citado "durante el plazo de dos años desde la notificación de la resolución administrativa por la que se declare el desamparo, los padres que continúen ostentando la patria potestad pero la tengan suspendida conforme a lo previsto en el número 1 de este artículo, están legitimados para solicitar que cese la suspensión y quede revocada la declaración de desamparo del menor".

Todo lo cual nos lleva al mantenimiento de la resolución impugnada en la presente instancia, por más que, como subyace de la argumentación del recurso, el apelante manifieste presentarse en condiciones y dispuesto a hacerse cargo en plenitud de los cuidados y atenciones de su hija que, **sin embargo, se descuidaron en el pasado** hasta los límites referidos en la resolución recurrida, según reiteran los informes citados en el expediente administrativo obrante en autos.

TERCERO-. En materia de costas procesales y pese a desestimarse el recurso no procede efectuar expreso pronunciamiento de condena en las causadas en este trámite procesal de la apelación, dado que puede apreciarse la concurrencia de dudas fácticas y jurídicas -a los solos efectos del pronunciamiento sobre costas-, acerca de cuál es la alternativa de guarda y tutela más favorable y beneficiosa en la protección de la menor que ha sido declarada en situación legal de desamparo. **Arts. 394 y 398 de la L.E.C .**

VISTOS, los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

[Ir arriba](#)

FALLO:

LA SALA ACUERDA: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que ha sido dictada con fecha 21 de septiembre de 2020 en el procedimiento de Juicio Verbal que se ha seguido con el número 663/2019 ante el Juzgado de Primera Instancia número Tres de Valladolid, debemos confirmar y confirmamos la referida resolución, sin que proceda efectuar expresa condena en las costas procesales causadas por esta apelación.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe, en su caso, interponer recurso de casación, ante esta sala, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.